

San Bernardo, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós

VISTO Y OÍDO:

Que, se ha presentado ante este Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo don **GUILLERMO ALEXIS MUÑOZ PINO**, licenciado en ciencias Jurídicas, y don **NELSON MARCELO SAN MARTÍN ARRIAGADA**, gestor deportivo, ambos con domicilio en calle Paseo Bulnes N° 166, oficina 45, comuna de Santiago; y entablan demanda por declaración de relación laboral, despido indirecto, termino anticipado de contrato de trabajo, cobro de indemnización por lucro cesante, y cobro de prestaciones laborales en contra de la **CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION Y SALUD DE SAN BERNARDO**, RUT 70.925.500-2, representada legalmente por don **GUSTAVO ALEJANDRO RUZ MUÑOZ**, ignora profesión u oficio, con domicilio en O'Higgins N° 840, San Bernardo.

ANTECEDENTES DEL ACTOR GUILLERMO ALEXIS MUÑOZ PINO:

Señala que ingresó a prestar servicios bajo subordinación y dependencia para la demandada con fecha 1 de marzo de 2022, como parte del equipo de trabajo del jefe del servicio de salud de atención primaria municipal don Carlos Carrasco Jiménez, como asesor legal para el Director del Servicio de Salud de Atención Primaria de la Corporación.¹

Refiere que se le ofreció un contrato de trabajo a plazo fijo por un año, el cual aceptó y por eso es que renuncié al trabajo que mantenía hasta ese momento con una remuneración de \$1.250.000 líquidos y cerca de su hogar.

Añade que el contrato duraría hasta el 31 de diciembre de 2022. Sin embargo, el 5 de abril de 2022 se autodespidió, debido a que no se les pagó su remuneración, pese a sus requerimientos a Recursos Humanos. Fue así como el 23 de marzo se le informó que había problemas con sus documentos, no obstante que los había entregado.

Sostiene que cumplía horario de 08:30 a 17:30 horas, ejerciendo sus funciones en los centros de salud de la Corporación, tales como "El Manzano", "Confraternidad", "Juan Pablo II", "Rucacheche". Sin embargo, las labores terminaban más tarde, en algunas ocasiones, es decir, a entre las 18 y las 21 horas.

Agrega que el 20 de marzo se le entregó la cuenta y contraseña del correo corporativo gmunoz@corsaber.cl, ya que antes usaba su cuenta personal. Luego, el 25 de marzo, se le hizo entrega de un computador portátil, marca HP para cumplir con las tareas requeridas, ya que hasta entonces usaba su propio computador. En la misma fecha se le hizo entrega de la credencial personal de identificación, con la que tuvo acceso a los estacionamientos de la Corporación de Salud, específicamente en la Casa de la Corporación de Cultura de San Bernardo.

Hace presente que el 10 de abril, a las 16 horas, se reunió con el Director de la Corporación, quien le indicó que le pagaría por medio de un cheque de \$750.000, contra la firma de un finiquito. Ante su negativa, llamó a su oficina al Gerente de Finanzas, don Gonzalo Rebolledo, y luego al jefe del



Departamento Jurídico, Sr. Macluf, preguntándoles si era cierto que se había presentado e identificado ante el jefe de la unidad jurídica como Abogado sin serlo, a lo que el Sr Macluf respondió que no fue así. Luego, el Sr. Ruz le ofreció pagar un millón de pesos, siempre que firmara los documentos que acreditaban que su contrato era por un plazo de 30 días, y por esa cantidad, lo que no aceptó, pues era algo del todo ilógico.

Además, prosigue, casi todos los trabajadores que conformaron el equipo de trabajo de don Carlos Carrasco Jiménez, se autodespidió, por similar incumplimiento contractual.

Acusa que el 8 de abril de 2022, a las 16:24 horas, recibió una carta certificada con el remitente del jefe de recursos humanos de la Corporación que indica que su contrato con una jornada de 44 horas cronológicas semanales en la dirección de salud, y cuya fecha de expiración es el día 05 de abril de 2022, no sería renovado para el próximo periodo en conformidad a lo establecido en el artículo 159 número 4 del Código del Trabajo, esto es, vencimiento del plazo convenido en el contrato, lo que constituye una falacia, no solo porque la carta se envió con posterioridad, sino porque su contrato no era a plazo fijo ni por 44 horas cronológicas, esto último, porque no se le enroló en el sistema biométrico de control de asistencia y registro de horario, precisamente porque no existía contrato escrito que diera cuenta de las horas que debía trabajar, dónde debía prestar servicios y mucho menos el plazo.

Advierte que sus cotizaciones de seguridad social no se encuentran pagadas correctamente y que en su cartola de AFP aparece una declaración y pago por un monto que no se condice con algún monto recibido en su cuenta bancaria.

Manifiesta que sus funciones eran, entre otras, la verificación de normativa y recomendaciones a la Dirección de Salud, redacción de escritos, redacción de informes y participación activa en las estrategias de mejoras en la gestión que se buscaban, como también asesoría legal al Director del Servicio de Salud de Atención primaria de la Corporación Municipal.

En cuanto a su remuneración mensual, dice que ascendía a la suma de \$1.500.000 líquidos.

Repite que el 5 de abril de 2022, puso término al contrato de acuerdo al artículo 160 numerales 1, 5 y 7 del Código del Trabajo, cumpliendo con las formalidades legales.

Alega que no percibió remuneración alguna desde el 1 de marzo hasta la fecha de su despido indirecto, es decir, el 5 de abril del 2022, además del no pago de sus cotizaciones previsionales, de salud, entre otras.

Subraya que la causal del artículo 160 N° 5 del Código del Trabajo se verificó, porque el secretario general de la Corporación Municipal, don Gustavo Ruz como el gerente de administración y finanzas de ésta, divulgaron a la interior de la entidad lo siguiente: "Que mi calidad de asesor legal y licenciado en ciencias jurídicas, no era tal, que no era licenciado. Que no era abogado y que ni siquiera estaba licenciado", cuestiones del todo falsa, ya que desde el primer momento dijo que era Licenciado en Ciencias Jurídicas y no Abogado. Lo anterior dijo haber perjudicado su dignidad y honra.



RESPECTO AL DEMANDANTE NELSON MARCELO SAN MARTÍN ARRIAGADA:

Señala que ingresó a prestar servicios bajo subordinación y dependencia para la demandada con fecha 1 de marzo del 2022, como parte del equipo de trabajo del recientemente nombrado jefe del servicio don Carlos Carrasco Jiménez, específicamente para el cargo de Gestor Deportivo. La duración del contrato de trabajo, tal como se le señaló al momento de ofrecerle el trabajo era de plazo fijo hasta el 31 de diciembre de 2022.

Sostiene que se le hizo entrega de un notebook, de correo electrónico institucional con clave y una credencial como trabajador de la Corporación Municipal.

Indica que es contrario a las máximas de la experiencia que un cargo de Gestor Deportivo de un director recién asumido sea por un mes, como lo afirmó la Corporación en la instancia administrativa.

Expone que las funciones que realizaba eran las de asesoría en materia de la vinculación del deporte y la salud, la vinculación de la corporación con el medio, el entorno y la comunidad.

Expresa que su jornada de trabajo era de 45 horas, de lunes a viernes, desde las 08:30 a 17:30 horas; mientras que su remuneración ascendía a la suma de \$1.800.000.

Advierte que no se escrituró el contrato de trabajo, razón por la cual puso término a la relación el día 6 de abril del año 2022, en virtud de lo preceptuado por el artículo 171, en relación con el artículo 160 numerales 1, 5 y 7 del Código del Trabajo, cumpliendo con las formalidades legales. Lo anterior, debido a la no escrituración del contrato de trabajo en el plazo máximo legal. Por no percibir su remuneración desde el 1 de marzo, así como al no pago de cotizaciones previsionales, de salud, entre otras.

En cuanto a la conducta de acoso laboral, de acuerdo al numeral 5 del artículo 160, indica que recibió cuestionamientos y sufrió la divulgación acerca de su contratación, todo lo que lo denostó en su dignidad de la persona, pues se puso en duda sus competencias profesionales para el cargo de Gestor Deportivo, cuando fue futbolista profesional, y además posee el título de entrenador profesional.

EN RELACIÓN CON LA NULIDAD DEL DESPIDO: Indica que el empleador adeuda el pago íntegro de cotizaciones previsionales por el periodo trabajado, siendo las instituciones previsionales las siguientes:

Respecto del demandante Guillermo Muñoz Pino: Se encuentra afiliado en AFP CUPRUM.

En cuanto al demandante Nelson San Martín Arriagada: Se encuentra afiliado en AFP PROVIDA.

Previas citas legales, solicita tener por interpuesta demanda, y con el mérito de la misma se declare la existencia de relación laboral, ajustado a derecho el despido indirecto, y se condene a la



demandada al pago de las siguientes indemnizaciones y prestaciones laborales, con reajustes, intereses y costas de la causa, a saber:

1. En el caso del demandante Guillermo Muñoz Pino:

- 1.1. Al pago de la indemnización sustitutiva del aviso previo, por la suma de \$ 1.500.000 (un millón quinientos mil pesos).
- 1.2. Al pago de la remuneración que va desde el 1 de marzo hasta el 31 de marzo por \$1.500.000.
- 1.3. La remuneración por los 4 días del mes de abril por la suma de \$375.000 líquidos;
- 1.4. Indemnización compensatoria por lucro cesante por las remuneraciones, por haber puesto anticipado al contrato de trabajo que va desde el 06 de abril hasta el 31 de diciembre es decir, 9 meses de remuneraciones por la suma de \$ 13.500.000 (trece millones quinientos mil pesos).
- 1.5. Cotizaciones previsionales y de salud señaladas en la demanda.
- 1.6. Nulidad del despido.

2. En el caso del demandante Nelson Marcelo San Martín Arriagada:

- 2.1. Indemnización sustitutiva del aviso previo, por la suma de \$1.800.000.-
- 2.2. Remuneración desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo por \$1.800.000; y la remuneración por los 5 días del mes de abril por la suma de \$ 360.000;
- 2.3. Indemnización compensatoria por lucro cesante por las remuneraciones por haber puesto anticipado al contrato de trabajo que va desde el 06 de abril hasta el 31 de diciembre es decir, 9 meses de remuneraciones por la suma de \$ 16.200.000 (dieciséis millones doscientos mil pesos).
- 2.4. Cotizaciones previsionales y de salud contenidas en la demanda.
- 2.5. Nulidad del despido.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: La parte demandada contestó en los siguientes términos:

Opuso excepción de incompetencia del Tribunal: Señala que el tribunal es absolutamente incompetente para conocer de estos autos, toda vez que ambos actores prestan funciones en el servicio de salud de la Corporación, por lo que estamos frente a la hipótesis del artículo 2° letra b) de la ley 19.38, en relación con el artículo 3° inciso 2° del mismo cuerpo legal, y en concordancia con el artículo 4° del Estatuto Administrativa, este último que reenvía a la ley 18.883.

Explica que los funcionarios regidos por el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal son funcionarios que se rigen por un estatuto especial, cuyo origen está en un régimen de Derecho Público preestablecido unilateral y objetivamente por el Estado, de manera que el vínculo no es



contractual, sino estatutario, por lo que no cabe aplicar las disposiciones que se refieren a los contratos de trabajo.

Previas citas legales y jurisprudenciales, solicita tener por opuesta excepción y con el mérito de la misma se rechace la demanda, con costas.

Conferido traslado a la demandante, en audiencia preparatoria, quien se opuso a los argumentos de la excepción opuesta, se dejó para definitiva.

Contestando derechamente: Señala que el contrato de los actores no daba lugar a subordinación y dependencia.

Agrega que las remuneraciones alegadas no se condicen con los grados y jerarquías establecidas en el artículo 23 de la ley 19.378. Así, la real remuneración de los actores eran las siguientes: a. Sr. San Martín: \$ 376.126 (trescientos setenta y seis mil ciento veintiséis pesos) líquidos. b. Sr. Muñoz: \$ 957.685 (novecientos cincuenta y siete mil seiscientos ochenta y cinco pesos).

Entiende que el despido indirecto no es aplicable en la especie, pues no se aplica el Código del Trabajo, así como tampoco ninguna de las indemnizaciones solicitadas. Y, en cuanto a las cotizaciones de seguridad social, dice que se encuentran todas pagadas, no siendo tampoco aplicable la institución de la nulidad del despido, sino la ley especial aludida.

Respecto de la remuneración de marzo de 2022, dice haberla pagado en el monto que correspondía.

Previas citas legales, solicita tener por contestada la demanda, y su rechazo, con costas.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, se han presentado ante este Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo don **GUILLERMO ALEXIS MUÑOZ PINO**, licenciado en ciencias Jurídicas, y don **NELSON MARCELO SAN MARTÍN ARRIAGADA**, gestor deportivo; y entablan demanda por declaración de relación laboral, despido indirecto, termino anticipado de contrato de trabajo, cobro de indemnización por lucro cesante, y cobro de prestaciones laborales en contra de la **CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION Y SALUD DE SAN BERNARDO**, RUT 70.925.500-2, representada legalmente por don **GUSTAVO ALEJANDRO RUZ MUÑOZ**, de acuerdo a los argumentos vertidos en la parte expositiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Que, en audiencia preparatoria, no habiéndose alcanzado conciliación, se fijaron los siguientes hechos:

HECHOS A PROBAR:



1. Existencia de relación laboral entre las partes. Fecha de inicio, función contratada, remuneración pactada, jornada de trabajo, en su caso.
2. Fecha de término de la relación laboral, en su caso. Hechos y circunstancias que rodearon la desvinculación de los demandantes.
3. Estado de pago de las cotizaciones de seguridad social demandadas.
4. Efectividad que la demandada adeuda indemnización compensatoria. En la afirmativa períodos y monto adeudado.
5. Efectividad que la demandada adeuda remuneraciones por los períodos demandados.

TERCERO: Que, en audiencia de juicio, las partes incorporaron los siguientes medios probatorios, a saber:

PRUEBA DE LA PARTE DEMANDANTE:

DOCUMENTAL (FOLIO 19):

DOCUMENTAL: GUILLERMO MUÑOZ PINO:

1. Set de correos electrónicos que dan cuenta de gestiones del demandante, de fechas 29, 30 y 31, 28, 25, 25, 24, 17, 1 de marzo, 01 de abril.
2. Set de correos de Corporación Municipal.
3. Correo electrónico entre el demandante Guillermo Muñoz y el jefe de unidad jurídica.
4. Correo electrónico sumario y minuta denuncia Sumario.
5. Correo electrónico con tema descanso y minuta;
6. Correo electrónico audiencia SAR;
7. Correo y Carta del 04 de abril 2022
8. Set de liquidaciones de remuneraciones como referencia para el cargo de asesor jurídico de la Corporación;
9. Acta de entrega computador a Guillermo Muñoz;
10. Correo cuentas de correo institucional
11. Busca dentro de información pública de institución.
12. Certificado de cotizaciones AFP CUPRUM (7092500-2)16.
13. Certificado de remuneraciones imponible AFP CUPRUM;



14. Copia de comunicación de término de contrato de trabajo.

15. Fotografía credencial institucional de Guillermo San Martín.

16. Carta de despido indirecto, y comprobantes de ingreso ante la Inspección del Trabajo, y de envío por carta certificada al empleador. Folio 38.

DOCUMENTOS NELSON SAN MARTÍN:

1. Correos de gestiones Nelson San Martín;
2. Copia de acta de comparendo de conciliación del demandante Nelson San Martín y la demandada;
3. Certificado de cotizaciones AFP PROVIDA;
4. Fotografía credencial institucional Nelson San Martín;
5. Comprobante de entrega de computador;
6. Cartola bancaria del mes de abril del año 2022 del señor San Martín.
7. Carta de despido indirecto, y comprobantes de ingreso ante la Inspección del Trabajo, y de envío por carta certificada al empleador de don Guillermo Muñoz Pino. Folio 44.

PRUEBA COMÚN A AMBOS DEMANDANTES:

1. Copia organigrama demandada;
2. Documento denominado comisión de salud;
3. Documento denominado portal de transparencia activa sobre estructura orgánica y facultades, funciones y atribuciones de órganos internos.
4. Copias de resoluciones números 136, 137, y 138 de la Corporación;
5. Acta de sesión del concejo número 28
6. Acta de sesión del concejo número 2
7. Acta de reunión de coordinación del equipo San Bernardo;
8. Actas de comparendo de ex trabajadores de la demandada sr Carlos Carrasco, Nicolás Pepe, Milton Cabrera, Alfonso Barril;
9. Fotografía de credenciales Carlos Carrasco, Nicolás Pepe, Alfonso Barril, Milton Cabrera, 10. Informe comercial Maat de la Corporación.

ABSOLUCIÓN DE POSICIONES: Se citó, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 454 N°3 del Código del trabajo, al representante legal de la parte demandada, compareciendo don



Pablo Agustín Veloso Alcaide, cédula nacional de identidad N° 8.8867.537-1, Abogado, Secretario General de la Corporación Municipal de Salud y Educación de San Bernardo.

No conoce a los actores.

Sabe el motivo de este juicio.

Estas personas se autodespidieron por considerar que fueron acosados laboralmente.

No conoce la fecha exacta de ingreso y término del vínculo de los actores.

Al parecer el señor Muñoz hacía apoyo jurídico y el otro actor hacía una suerte de capacitación a los funcionarios de los CESFAM de San Bernardo.

Es efectivo que los demandantes no se les escrituraron los contratos de trabajo, no lo sabes.

Es efectivo que los actores testaban contratados bajo el Código del Trabajo. Si es efectivo.

TESTIMONIAL: Fueron conducidos a estrados los siguientes testigos, quienes debidamente juramentados y legalmente examinados, declararon al tenor de las preguntas formuladas por los intervinientes, a saber:

1. CARLOS ANDRÉS CARRASCO JIMÉNEZ, MÉDICO SIQUIATRA, cédula nacional de identidad N° 12.013.295-4, EX DIRECTOR DE SALUD.

Conoce a los actores, señores Muñoz y San Martín, porque trabajaron junto a él como parta de su equipo de trabajo en la Corporación Municipal de Educación y Salud.

El señor Muñoz era asesor jurídico, tenía la misión de coordinarse recibir todo tipo de documentos de implicancia jurídica y para poder después firmarlos y enviarlos.

El señor San Martín trabajó en el Depto. de Participación y prevención en salud, bajo la supervisión de Gonzalo Pacheco.

La jornada de trabajo era de lunes a viernes de 8.30 a 17.30 horas, pero a requerimiento del alcalde se solicitaba quedarse hasta las 7 u 8 de la tarde y todos los sábado había reunión del comité político, del cual él formaba parte.

Veía a los actores todos los días de la semana y en horarios extras que les solicitaban.

Los actores trabajaron desde el 1 de marzo de 2022. Se conectaron con el alcalde y con el secretario municipal, señor Ruz, quienes autorizaron la contratación hasta diciembre de 2022.

Los actores trabajaron hasta el 31 de marzo y cesaron efectivamente en funciones el 5 de abril de 2022.



El señor Carrasco tenía una remuneración de \$1.500.000, mientras que el señor San Martín ganaba \$1.800.000. Esto fue lo acordado con el alcalde y el secretario, señor Ruz, pero no tiene documentos escritos, porque fue de palabra.

El testigo dijo tener un juicio pendiente contra la Corporación Municipal de Educación y Salud, su pretensión es que se haga justicia.

2. MILTON OMAR CABRERA ÁLVAREZ, CEDULA NACIONAL DE IDENTIDAD 9.065.132-3, empleado.

Conoce a ambos actores, porque eran parte del equipo de la Dirección de Salud de la Corporación Municipal de Educación y Salud.

Coincidió con el testigo anterior en cuanto a las funciones de ambos actores, así como la fecha de inicio de la relación laboral, es decir, el 1 de marzo de 2022 hasta el 5 o 6 de abril del mismo año.

Guillermo revisaba programas médicos en regla, montos y distribución de los mismos y todo documento en que tuviera que ver la Dirección de Salud. Y don Nelson era el gestor deportivo para generar instancias deportivas establecidas por la dirección de salud.

El horario de trabajo era de lunes a viernes de 8.30 a 17.30 horas, con extensión por citación del alcalde de última hora.

Los jefes de los actores eran el director de salud, el señor Carlos Carrasco Jiménez, y por encima estaba el secretario y el alcalde como presidente de la Corporación Municipal de Educación y Salud.

No se cumplieron normativas como firmar el contrato, y no se pagó las remuneraciones ni las cotizaciones.

Veía a los actores todos los días, debido a que a primera hora se hacían coordinaciones y siempre el testigo estaba en ellas. Los veía a diario y con regularidad.

El testigo trabajaba bajo Código del Trabajo. No estaba bajo la norma de la APS. No tenía contrato de trabajo. Se le entregó credencial al testigo. Tenía un contrato verbal con jornada laboral de lunes a viernes.

El señor Muñoz no tenía profesión, porque era licenciado en derecho.

Los actores trabajaban en una sala de reuniones, pero oficina personal no tenían.

Ellos tenían credencial para acceder al edificio y computadores para cumplir sus funciones.

EXHIBICIÓN DOCUMENTAL: Bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 453 N° 5 del Código del Trabajo, se ordenó la exhibición de los siguientes documentos: Resoluciones N°136, 137, 138 de abril del 2022.



OTROS MEDIOS DE PRUEBA: Tener a la vista las siguientes causas seguidas ante este tribunal: RIT O-321-2022, caratulados CABRERA/CORPORACIÓN MUNICIPAL; Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo RIT O-361-2022, caratulados CARRASCO/CORPORACIÓN MUNICIPAL; Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo.

Link de sesiones del concejo municipal de la I Municipalidad de San Bernardo n° 28 y N° 29 ambos de abril del 2022: .- Sesión n° 28 de abril del 2022: <https://www.youtube.com/watch?v=NWY10oi3MV8>, el tramo que va desde el minuto 13:20 hasta el minuto 20:47, del registro audiovisual: Sesión n° 29 de abril del 2022: <https://www.youtube.com/watch?v=El2luQdyWws>, el tramo que va desde el minuto 01:04 hasta el minuto 01:12:10, del registro audiovisual

PRUEBA DE LA PARTE DEMANDADA:

DOCUMENTAL (FOLIO 14, 15 y 58):

1. Contrato N°28.141, del actor (Sr. San Martín) de fecha 01 de marzo del 2022.
2. Liquidación de remuneraciones, del mes de marzo del actor (Sr. San Martín) del 2022.
3. Certificado de pago de cotizaciones del actor (Sr. San Martín) del mes de marzo del 2022
4. Declaración Jurada de ingreso de trabajo regido por estatuto de atención primaria Sr. Muñoz, de fecha 13 de marzo del 2022.
5. Liquidaciones de sueldo de marzo y abril del 2022 y transferencias a la cuenta del Sr. Nelson San Martín. (FOLIO 59)
6. Liquidaciones de sueldo de marzo y abril del 2022 y certificado de no retiro de los cheques del Sr. Guillermo Muñoz.

ABSOLUCIÓN DE POSICIONES: Se citó a la parte demandante a absolver posiciones, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 454 N°3 del Código del Trabajo.

GUILLERMO MUÑOZ PINO:

Trabajaba para el director de salud, pero se le delegó trabajos en la oficina jurídica.

Trabajaba para el Depto. de Salud.

Fue contratado por el Código del Trabajo.

No fue citado a firmar contrato a la CMUNI.

El sueldo de \$1.500.000 se lo ofreció el doctor Carrasco a requerimiento de él y eso lo pactó con el señor Ruz y el alcalde, porque este último dijo que no quería tener problemas con salud.

Hay trabajadores en salud por Código del Trabajo, no solo por APS.



Su superior directo era Rachid Macluf, según el secretario general.

Prestaba servicios en la Corporación Municipal de Educación y Salud. En el edificio de calle O'Higgins N° 840, San Bernardo, en el Edificio de la CMUNI.

NELSON SAN MARTÍN ARRIAGADA:

Se le depositó una cantidad en el mes de abril que no era lo pactado de \$1.800.000. Eso se lo ofreció el señor Carlos Carrasco. Él tenía facultad, porque lo llevó y habló con el alcalde. Estuvo en una reunión con el señor Carrasco, el alcalde, el secretario general, el gerente de finanzas, y un abogado. Ahí ratificaron el compromiso de esa remuneración.

Su labor específica era de gestor deportivo.

Fue contratado bajo las normas del Código del Trabajo.

Le preguntaron si el cargo suyo de gestor deportivo no sabía que era contratados como APS, porque ese cargo no existía anteriormente.

TESTIMONIAL: Fueron conducidos a estrados los siguientes testigos, quienes debidamente juramentados y legalmente examinados, declararon al tenor de las preguntas formuladas por los intervinientes, a saber:

1. GUSTAVO ALEJANDRO RUZ MUÑOZ, CEDULA NACIONAL DE IDENTIDAD 12.657.865-2, ABOGADO.

Tuvo una reunión con los actores para determinar sus pretensiones y les dijo que estaban erradas, conforme a la ley de APS. Ellos dijeron que se les prometió sueldo y condiciones laborales que no se podían entregar.

Se les explicó que la norma del APS era su contratación.

El señor Carrasco era el director de la Corporación Municipal de Educación y Salud.

Hay una escala en la APS, la ley de atención primaria de salud. Contratos a plazo fijo e indefinidos, este último por concurso público. Además, existen categorías, según los requisitos exigidos.

Los actores trabajaban bajo la figura de asesorar al director de salud de la época.

Los actores ingresaron a prestar servicios, pero no sabe una fecha precisa.

Los actores se autodespidieron.

Los actores no prestaron servicios en marzo de 2022 y cuando llegaron pretendieron prestaciones que no cumplían con la ley de APS (Atención Primaria de Salud)

Los actores cumplían horario por APS, es decir, un período jornada normal y extraordinaria.



A los demandantes, después de ingresar se les indicó que debían firmar el contrato de APS, pero no lo hicieron. Esto fue después de la reunión en que se les dijo que no podían pagarles lo que pedían. Esta reunión se hizo a las dos semanas de que llegaran estas personas.

El contrato se les entregó materialmente, pero en las categorizaciones no se le podía pagar los sueldos que ellos estaban pidiendo.

Se negaron a firmar la contratación de acuerdo a la ley de APS y después se autodespidieron.

El motivo exacto del despido indirecto de los actores no lo sabe.

2. RUTH ESTHER LEIVA VALENZUELA, CEDULA NACIONAL DE IDENTIDAD 13.937.837-7, EDUCADORA DE PÁRVULOS.

Señala que se reunió con los actores en la sala de reuniones del secretario general. En esa reunión el director presentó a su equipo y dijo las funciones que iban a prestar, las condiciones contractuales ante la APS y de acuerdo a la categorización se discutió.

El director no tenía facultad para fijar sueldos, porque eso esta categorizado en la ley de APS

Toda la gente que trabaja lo hace por la ley de APS y su reglamento, en que se categoriza a los funcionarios.

3. ESTEBAN AMADOR SANFURGO ELGUEDA, cédula nacional de identidad N° | 14.473.693-1, INGENIERO DE EJECUCION EN GESTIÓN PÚBLICA.

Señala que a contar del 14 de julio es jefe del Dpto. de RHHH del área de salud de la Corporación Municipal de Educación y Salud.

Está a cargo de las contrataciones en el área de salud.

La norma que rige los contratos es la 19.378. Ley de APS.

En esa ley se establecen categorías de sueldos, de acuerdo a los estudios de las personas que serán contratadas. Se asigna un nivel que comienza en el 15 y es ascendente de acuerdo a los años.

Un no profesional corresponde a C o D o administrativo letra E.

EI GRADO E 450.000.-

EL GRADO D 500.000.-

EL GRADO C – 15: 580.000.-

LOS PROFESIONALES: CATEGORIA B 1.100.000 Y A 15 1.550.000.-



CUARTO: Que, en cuanto a la excepción de incompetencia absoluta del tribunal, se rechazará, pues la competencia constituye cada uno de los grados de conocimiento y fallo que corresponden a los tribunales.

El artículo 108 del Código Orgánico de Tribunales define la competencia como la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones.

Por su parte, el artículo 420 letra a) del Código del Trabajo entrega competencia a los Juzgados de Letras del Trabajo para conocer sobre las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales o colectivos de trabajo o de las convenciones y fallos arbitrales en materia laboral.

En este entendido, la competencia absoluta es aquella que determina la clase y, eventualmente, la jerarquía del tribunal llamado por ley a conocer de un asunto determinado; el que en el caso de marras es el Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo, el que – de acuerdo al mérito de la prueba de autos –, deberá dirimir si estamos o no frente la existencia de relación laboral o no, razón por la cual esta excepción será rechazada.

QUINTO: Que, en cuanto a la “Existencia de relación laboral entre las partes”: Es preciso señalar que ambos actores se desempeñaban en el servicio de salud, dependiente de la Corporación Municipal de Educación y Salud, hecho que esta última tampoco negó.

Dicho lo anterior, es preciso dejar sentado que la Ley 19.378, que establece el **"Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal"**, en su título preliminar, en el artículo 1° señala lo siguiente:

"Esta ley normará, en las materias que en ella se establecen, la administración, régimen de financiamiento y coordinación de la atención primaria de salud, cuya gestión, en razón de los principios de descentralización y desconcentración, se encontrará traspasada a las municipalidades al 30 de junio de 1991, en virtud de convenios regidos por el decreto con fuerza de ley número 1-3063, del Ministerio del Interior, de 1980. Asimismo, normará los aspectos anteriormente citados respecto de aquellos establecimientos de atención primaria de salud que sean creados por las municipalidades; traspasados con posterioridad por los Servicios de Salud; o que se incorporen a la administración municipal por cualquier causa. También regulará, en lo pertinente, la relación laboral, carrera funcionaria, deberes y derechos del respectivo personal que ejecuta acciones de atención primaria de salud"

En el artículo segundo, la ley establece lo que se debe entender por establecimientos municipales de atención primaria de salud, precisando que son los consultorios generales urbanos y rurales, las postas rurales y cualquier otra clase de establecimientos de salud administrados por las municipalidades o las instituciones privadas sin fines de lucro que los administran en virtud de convenios celebrados con ellas. El mismo artículo señala quiénes son las entidades administradoras de Salud Municipal, esto es, las personas jurídicas que tengan a su cargo la administración y



operación de establecimientos de atención primaria de salud municipal, sean éstas las municipalidades o instituciones privadas sin fines de lucro a las que la municipalidad haya entregado la administración de los establecimientos de salud, en conformidad con el artículo 12 del decreto con fuerza de ley número 1-3.063, del Ministerio del Interior, de 1980.

En lo referente al régimen laboral de atención primaria de Salud Municipal, la ley en el artículo 4º indica que en todo lo no regulado expresamente por las disposiciones de este Estatuto, se aplicarán, en forma supletoria, las normas de la ley número 18.883, “Estatuto de los funcionarios municipales”. Agrega que el personal al cual se aplica el estatuto no estará afectó a las normas sobre negociación colectiva y, sobre la base de su naturaleza jurídica de funcionarios públicos, podrá asociarse de acuerdo con las normas que rigen al sector público. Luego, en el inciso tercero, señala que en materia de concursos, jornada de trabajo, feriados y permisos, a los profesionales funcionarios a que se refiere la ley 15.078, les serán aplicables, supletoriamente, las normas de dicho cuerpo legal, en cuanto sean conciliables con las disposiciones y reglamentos de esta ley.

El artículo 14 de la ley en estudio, señala que el personal podrá ser contratado a plazo fijo o indefinido. Define que los funcionarios con contrato indefinido son aquellos que ingresan previo concurso público de antecedentes, de acuerdo con las normas de este cuerpo legal. En tanto, se consideran funcionarios con contrato a plazo fijo los contratados para realizar tareas por periodos iguales o inferiores a un año calendario. El número de horas contratadas, a través de esta modalidad, no podrá ser superior al 20% de la dotación; no incluyéndose en ese porcentaje a quienes estén prestando servicios en razón de un contrato de reemplazo.

El artículo 15 de la ley, refiere que la jornada ordinaria de trabajo será de 44 horas semanales, distribuidas de lunes a viernes, en horario diurno y continuo, comprendido entre las 8 y 20 horas, con tope de 9 horas diarias.

El artículo 16, de la ley señala que el personal contratado en forma indefinida tendrá derecho a la estabilidad en sus funciones y su relación laboral solamente terminará por alguna de las causas que indica dicho cuerpo normativo.

En cuanto a la carrera funcionaria, el artículo 31 refiere que ésta debe garantizar la igualdad de oportunidades para el ingreso y el acceso a la capacitación; la objetividad de las calificaciones y la estabilidad en el empleo; reconocer la experiencia, el perfeccionamiento y el mérito funcionario, en conformidad con las normas de este Estatuto.

El artículo 32 se refiere al ingreso a la carrera funcionaria, el cual se materializa a través de un contrato indefinido, previo concurso público de antecedentes, cuya base será aprobada por el Concejo Municipal y será convocado por el Alcalde respectivo.

El artículo 36, contempla una excepción en relación con los concursos para ingresar a una dotación, la que guarda relación con la permuta conforme al artículo 20.

En cuanto a las causales de término de la relación laboral, el artículo 48 contempla diversas hipótesis, destacando la letra c), vale decir, vencimiento del plazo del contrato.

SEXTO: Que, de acuerdo a lo previsto en la ley 19.378, el sistema contemplado para el personal que forma parte de la dotación de establecimientos municipales de atención primaria de salud, permite la contratación de funcionarios con contrato indefinido, diferenciándolos de los



funcionarios con contrato a plazo fijo, en tanto estos últimos no ingresan a través de un concurso público de antecedentes, razón por la cual no pueden acceder a la carrera funcionaria ni gozan de estabilidad en el empleo, toda vez que prestan funciones por periodos iguales o inferiores a un año calendario.

En el caso de los actores, ambos sostuvieron en sus libelos que habrían sido contratados en virtud de un contrato que duraría hasta diciembre de 2022.

En este orden de ideas, tratándose de personal contratado a plazo fijo, el ingreso al sistema lo es por un período limitado de tiempo, lo que no permite establecer que su contrato nunca tuvo la naturaleza de indefinido, por lo que no han tenido acceso a la estabilidad en el empleo y a una carrera funcionaria, pues si así fuere se estaría vulnerando la ley, la que establece que para el ingreso de funcionarios con contrato indefinido se requiere de un concurso público de antecedentes.

Pensar de manera diferente implicaría que una persona contratada a plazo fijo, pudiese alcanzar una situación o condición estatutaria pasando por encima de los requisitos previstos por el legislador para ello, oponiéndose al sistema de conformación de la dotación de la ley 19.378, y configurándose respecto de él una situación de privilegio que importa discriminación respecto de candidatos que postulan a funciones con contrato indefinido, contando con los antecedentes necesarios que un concurso público exige, de lo que se sigue que quienes postulan no estarían en igualdad de condiciones con aquellos funcionarios que, desde un comienzo, sabían perfectamente que su contrato tenían una fecha de término, no más allá del 32 de diciembre de 2022 en caso de los actores, tal como lo sostuvieron en su libelo.

A esta misma conclusión ha arribado la Dirección del Trabajo, como consta en los dictámenes número 5313/351 de 2 de noviembre de 1998; 4294/0309 de 16 de octubre del año 2000, en que se señala que la ley 19.378 ha regulado el régimen de contratación del personal que labora en la salud primaria municipal, la oportunidad para la provisión de los cargos a través de concurso público de antecedentes y la renovación de los contratos a plazo fijo, y en ninguna parte de dicho cuerpo legal se contempla un tope de años con contrato de plazo fijo que obliguen a llamar a concurso ni a la aplicación supletoria del Código del Trabajo en tales materias. De esta manera, la Dirección del Trabajo concluye que resultaría procedente que para atender los servicios asistenciales de salud, las entidades administradoras incorporen personal por la modalidad de la contratación temporal o de corta duración, pudiendo renovar esa contratación tantas veces como lo requiera la atención de la salud primaria, sin que la ley haya impuesto ninguna limitación o tope para esas renovaciones que no sea la necesidad de atención del servicio o su presupuesto.

SEPTIMO: Que, la Excelentísima Corte Suprema en diversos fallos (Roles N° 8074-2018; 4.237-2019; N° 24.729-2018; N° 25.172-2018; N° 24.725-2018 y N° 24.728-2018, 15.697-2019), ha resuelto que no resulta procedente aplicar la normativa del derecho común que permite transformar contratos a plazo fijo en indefinidos bajo ciertas circunstancias, puesto que, como se ha dicho, ello se opone al sistema de conformación de la dotación prevista por la ley 19.378 (Considerando noveno, causa Rol 4237/2018, de fecha 21 de octubre de 2019. Fuente: www.microjuris.cl).

En base a lo razonado precedentemente, no estamos frente a una relación regida por el Código del Trabajo, por lo que tampoco resultaba aplicable la figura del despido indirecto invocada por los



actores para poner término al vínculo que los unió con el municipio, ya que la forma de finalizar este tipo de relaciones están regidas por el estatuto especial, de lo que se sigue que la demanda de los actores será rechazada en todas sus partes.

OCTAVO: Que, la totalidad de la prueba rendida en juicio ha sido valorada conforme a las reglas de la sana crítica, sin contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, y el resto de la prueba incorporada en juicio en nada altera lo razonado precedentemente, no obstante haberse valorado conforme a derecho.

Las declaraciones de los testigos, así como de los absolventes de ambas partes, en nada alteran lo razonado, porque se trata de una controversia relativa a la interpretación y aplicación de la ley, tomando en consideración que no se negó que los actores fueron contratados para la Corporación Municipal de Educación y Salud, sin embargo, se ha arribado a la conclusión que sus contratos, así hayan sido escriturados, de acuerdo a la ley de APS, no se rigen por el Código del Trabajo, sino por el estatuto especial al que se ha hecho referencia en este fallo.

NOVENO: Que, no se condena en costas a los demandantes, por haber tenido motivo plausible para litigar.

Por estas consideraciones, y visto lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 41, 42, 63, 67, 73, 162, 168, 171, 174, 453, 454, 457, 459, **se resuelve:**

- I. Que, **se rechaza, en todas sus partes**, la demanda interpuesta por los señores **GUILLERMO ALEXIS MUÑOZ PINO y NELSON MARCELO SAN MARTÍN ARRIAGADA**, en contra de la **CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION Y SALUD DE SAN BERNARDO**, RUT 70.925.500-2, representada legalmente por don **GUSTAVO ALEJANDRO RUZ MUÑOZ**, declarándose que entre las partes no ha existido relación laboral.
- II. Que, no se condena en costas a los actores, por estimarse que han tenido motivo plausible para litigar.

Regístrese y notifíquese.

RIT O-297-2022

RUC 22- 4-0409192-5

Dictada por Arturo Briceño Rivera, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo.

